

PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
(2025-2030)

Año 2024
Palacio Nacional
Santo Domingo, República Dominicana

Tabla de contenido

PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	3
1. BASES SOBRE LAS CUALES PACTAMOS.....	5
2. VISIÓN AL 2030.....	5
3. MISIÓN.....	5
4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY	6
5. ROL DE LOS ACTORES QUE INCIDEN EN EL ESTADO DE LA SEGURIDAD VIAL.....	6
5. TRANSPARENCIA.....	8
CONSIDERACIONES FINALES	8

PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

REUNIDOS los diferentes sectores, instituciones del Gobierno Central, representantes de organizaciones empresariales, laborales y sociales, los miembros del Comité Consultivo de Participación Social de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y otros actores de la sociedad que inciden en el estado de la seguridad vial de la República Dominicana; con la presencia de representantes de organismos de Cooperación Internacional, expertos en la materia, e invitados especiales en calidad de testigos convocados por el excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

EN EL ENTENDIDO DE QUE:

RECONOCEMOS que la inmensa mayoría de las muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tráfico son prevenibles y que, se constituyen en un importante problema de salud pública y de desarrollo que tiene amplias consecuencias sociales y económicas que, de no encararse, pueden continuar afectando en gran manera la vida de los conductores y transeúntes de la República Dominicana.

RECONOCEMOS que de acuerdo con el Informe sobre el Estado Mundial de la Seguridad Vial 2023 emitido por la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana es el segundo país con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito en la Región, y se encuentra en el puesto trece (13) a nivel mundial.

RECONOCEMOS que en la República Dominicana se registran más de tres mil (3,000) muertes anuales por accidentes de tránsito, lo que se traduce en ocho (8) muertes cada día, en promedio, según datos proporcionados por el Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), creado por mandato de la Ley 63-17. Destacando que, las lesiones por accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte de la población general del país, y es la primera causa de muertes en niños de a 10 a 14 años y en adultos de 15 a 49 años.

RECONOCEMOS que el setenta y dos por ciento (72%) de las muertes a causa del tránsito ocurren en las principales carreteras y autopistas que recorren las provincias del país.

RECONOCEMOS que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en su Resolución 74/299 un Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el objetivo de reducir las muertes y traumatismos debidos al tránsito en mínimo un cincuenta por ciento (50%) durante ese período de tiempo.

RECONOCEMOS que el enfoque de sistemas de seguridad es un componente esencial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial y que reconoce que el transporte por carretera es un sistema complejo, situando la seguridad en su centro, y que los seres humanos, los vehículos y la infraestructura vial deben interactuar de una manera que se garantice un alto nivel de seguridad.

CONSIDERAMOS que el artículo 8 de la Constitución de la República establece que, es función esencial del Estado, entre otras atribuciones, la de proteger de forma efectiva los derechos de la persona, y la de obtener los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco compatible con el orden público, y el bienestar general.

CONSIDERAMOS que la Constitución de la República en su artículo 37, establece que, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, por tal razón el Estado dominicano se encuentra en la obligación de implementar políticas públicas orientadas a contribuir a la educación vial y de esta manera prevenir los accidentes de tránsito.

CONSIDERAMOS que el artículo 25 de la Ley 1-12, del 25 de enero del 2012, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece dentro de su objetivo específico 3.3.6, la línea de acción 3.3.6.8 que refiere sobre la

necesidad de: *“Fortalecer la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito, en consonancia con una nueva institucionalidad y regulación sectorial.”*

CONSIDERAMOS que como parte de las políticas públicas orientadas a contribuir a la educación vial de la República Dominicana, fue promulgada la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, del 24 de febrero de 2017, mediante la cual se crea el INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTRANT), como órgano rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y que tiene a su cargo cumplir y hacer cumplir la citada ley y sus reglamentos de aplicación, en el marco de sus atribuciones.

CONSIDERAMOS que dentro de los principios rectores establecidos en el artículo 6 de la precitada Ley núm. 63-17, se prevé el: *“Fortalecimiento de la educación vial de la ciudadanía, respeto a las normas de tránsito y ejecución de políticas de seguridad vial en busca de la drástica reducción de la tasa de siniestralidad en todo el territorio nacional y la reducción de los impactos negativos de los accidentes de tránsito en términos humanos, sociales, de salud pública, económicos y presupuestarios.”*

RECONOCEMOS que el país cuenta con un Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana (PENSV) 2021-2030, en el que asumió el compromiso de “reducir en un 50% la tasa de mortalidad a causa del tránsito al 2030”, como una meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ODS 3.

RECONOCEMOS que en el año dos mil veinticuatro (2024) se ha constatado la necesidad de propiciar un mayor impulso con el fin de garantizar el logro de las acciones del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana (PENSV) 2021-2030, de modo que de un tres por ciento (3%) de las iniciativas logradas a la fecha sean elevadas en un cien por ciento (100%) al finalizar el período en el cual se circunscriben las acciones que se derivan del presente documento.

RECONOCEMOS que la meta de reducir considerablemente las muertes por accidentes de tránsito y la inseguridad vial en la República Dominicana requiere de un abordaje integral, multisectorial e interinstitucional, que permita incidir en los diferentes factores de la seguridad vial.

RECONOCEMOS que el Pacto Nacional por la Seguridad Vial constituye un llamado solemne a los principales actores de la sociedad dominicana que inciden en esta problemática, para la afirmación del compromiso de todos en favor de la mejoría de la seguridad vial en la República Dominicana.

RECONOCEMOS que el Pacto Nacional por la Seguridad Vial será el punto de partida para evaluar el Plan de Seguridad Vial 2021-2030 y reformular un nuevo Plan Nacional para la Seguridad Vial 2025-2030, que involucre actores de toda la sociedad y que contemple medidas oportunas, sostenibles y de impacto para cambiar el estado de la seguridad vial de la República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo.

RECONOCEMOS que posterior a la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, es fundamental participar en las mesas técnicas de trabajo y en los talleres que permitirán precisar las acciones y compromisos de todos los actores, con miras a definir los plazos e indicadores de avance que dará como resultado la implementación del presente.

ASUMIMOS que el respeto a la Constitución de la República, el cumplimiento de las leyes y la defensa de los valores éticos de respeto, integridad, veracidad y responsabilidad son consustanciales al proceso y suscripción del presente Pacto Nacional por la Seguridad Vial de la República Dominicana.

El presente preámbulo forma parte integral del Pacto Nacional por la Seguridad Vial.

En tal sentido, las siguientes son las:

1. BASES SOBRE LAS CUALES PACTAMOS

1.1 Es función esencial del Estado, entre otras atribuciones, la de proteger de forma efectiva los derechos de la persona, y la de obtener los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco compatible con el orden público, y el bienestar general.

1.2 El Estado orientará sus acciones para garantizar la seguridad vial de todas las personas que decidan desplazarse en los medios y modalidades de transporte terrestres disponibles, interviniendo sobre los factores de riesgo y atendiendo de forma especial a los grupos de riesgo y usuarios vulnerables.

1.3 Se hace necesario la implementación de esfuerzos para informar, persuadir o motivar a las personas en procura de cambiar sus creencias y conductas para mejorar la seguridad vial en general, por medio de actividades de comunicación, con el apoyo interpersonal u otras acciones de apoyo como las actividades de los cuerpos policiales, educación, legislación, aumento del compromiso personal, gratificaciones, entre otros.

1.4 Es responsabilidad de todos los ciudadanos la realización de esfuerzos continuos y consistentes basados en el diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento y operación de los sistemas de seguridad vial del país, determinando objetivos, acciones y calendarios, de forma que concluyan en una acción multisectorial, encaminados a reducir las víctimas y lesionados por los accidentes de tránsito a corto, mediano y largo plazo.

1.5 La seguridad vial es el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados con un enfoque multidisciplinario sobre las medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tránsito en las vías, desde el diseño de éstas y su equipamiento, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tránsito, el diseño de los vehículos y sus elementos de protección activa y pasiva, la inspección técnica vehicular, la formación de los conductores y los reglamentos de conductores; también la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas de los accidentes de tránsito.

1.6 Se hace necesario el fortalecimiento de la educación vial de la ciudadanía, respeto a las normas de tránsito y ejecución de políticas de seguridad vial en busca de la drástica reducción de la tasa de siniestralidad en todo el territorio nacional y la reducción de los impactos negativos de los accidentes de tránsito en términos humanos, sociales, de salud pública, económicos y presupuestarios.

2. VISIÓN AL 2030

Reducir al 2030 en un 50% las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en República Dominicana.

3. MISIÓN

Movilizar a la sociedad dominicana con el propósito de concertar prioridades y acciones que se hacen necesario ejecutar para lograr una significativa reducción de la cantidad de personas fallecidas y lesionadas por de tránsito en la República Dominicana, mediante la creación de mesas de trabajo participativas, el acompañamiento de expertos, implementación de medidas y mecanismos de monitoreo y evaluación.

4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY

4.1 En cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes, reconocemos que el Estado es el garante del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos fundamentales.

4.2 Todos los actores suscribientes, nos comprometemos a actuar apegados a la legalidad, ética y transparencia, mediante la aplicación y respecto efectivo de la Constitución y las leyes vigentes, de manera particular la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, así como su reglamentación complementaria, que sustenta su aplicación. Sin dejar de lado, la legislación de carácter general relativas al control interno, servicio civil, carrera administrativa, relaciones laborales, libertad sindical, medioambiente, gestión de riesgos, transparencia y rendición de cuentas, todo ello bajo un esquema de planificación y regulación.

5. ROL DE LOS ACTORES QUE INCIDEN EN EL ESTADO DE LA SEGURIDAD VIAL

1. Contribuir con la difusión del conocimiento y cumplimiento de la Ley Núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, sus reglamentos y normativas derivadas.
2. Contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad, de modo que se permita la continuidad en los planes, programas y proyectos necesarios para la mejora de la seguridad vial, como también la adecuada coordinación entre los actores involucrados.
3. Impulsar la elaboración y puesta en marcha de los planes laborales de Seguridad vial y Movilidad, que permita que las empresas privadas, instituciones públicas, asociaciones sin fines de lucro y todas las organizaciones con empleados, mejoren la seguridad vial a través de acciones preventivas y correctivas relacionadas a la actividad laboral.
4. Impulsar la elaboración y puesta en marcha de los planes locales de seguridad vial, como un instrumento de planificación y gestión participativa de los gobiernos locales, que vincula los diversos actores que tienen responsabilidad sobre la seguridad vial en el ámbito local, procurando dar respuestas sistemáticas y robustas a esta problemática.
5. Contribuir con el fortalecimiento de la fiscalización del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en materia de seguridad vial.
6. Velar por diseños, construcciones y mantenimiento de edificaciones e infraestructuras urbanas y rurales que garanticen una circulación segura para los usuarios, así como una señalización clara y mantenimiento regular para evitar factores de riesgo como el deterioro vial o las condiciones climáticas adversas.
7. Fomentar la realización de auditorías e inspecciones de seguridad vial en las carreteras del país, siguiendo un proceso estandarizado que permita identificar los puntos críticos y/o tramos de concentración de accidentes.
8. Promover la elaboración y difusión masiva de campañas de educación y seguridad vial desde todos los estamentos de la sociedad y canales de comunicación interna y externa de las organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro, con miras a elevar el nivel de conocimiento de la población en esta materia.
9. Promover la educación vial en el sistema educativo público y privado formal, que permita sensibilizar toda la comunidad educativa, en particular, a niños, adolescentes y jóvenes, así como a padres y maestros.

10. Fomentar la reeducación de los conductores de las diversas ramas, tales como transporte de pasajeros, de carga, turístico, escolar, entre otros.
11. Fomentar la educación vial en los diversos espacios de socialización, entidades comunitarias, juntas de vecinos y organizaciones sociales y artísticas, asegurando que las campañas estén adaptadas a los contextos locales y culturales, y que incluyan metodologías que generen cambios de comportamiento en las comunidades.
12. Favorecer la revisión y mejora permanente del régimen de consecuencias, de acuerdo con las tendencias de las conductas de los ciudadanos, que garanticen la efectividad en el tiempo.
13. Cooperar en favor de la reforma que instituye el sistema de Inspección Técnica Vehicular (ITV) en el país, consignado en la Ley Núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, para garantizar que solo vehículos en condiciones óptimas estén autorizados a circular, disminuyendo así los accidentes por fallas mecánicas.
14. Contribuir con la comercialización de vehículos seguros en el país, que cuenten con los elementos modernos de seguridad activa y pasiva, y que se orienten a los mejores estándares locales e internacionales.
15. Cooperar en favor de la difusión y avance de la reforma que instituye el sistema de licencia por puntos en el país, consignado en la Ley Núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana y su Reglamento de Aplicación emitido mediante Decreto Núm. 4-19, que dicta el Reglamento sobre el Sistema de Puntos de la Licencia de Conducir, para asegurar que todos los usuarios de la vía comprendan las consecuencias de sus infracciones y fomenten un manejo responsable.
16. Desarrollar mecanismos para la correcta gestión y la remisión oportuna de los datos de siniestralidad vial por parte de los sectores pertinentes.
17. Fomentar el desarrollo de investigaciones en seguridad vial desde la educación superior y otras entidades de generación de conocimiento, para el desarrollo eficiente de las políticas públicas.
18. Fomentar las colaboraciones público-privadas y los patrocinios para implementar acciones de seguridad vial, en especial las campañas de seguridad vial y en la implementación de nuevas tecnologías para la reducción de siniestralidad, la gestión del transporte y la movilidad.
19. Apoyar la rápida aprobación y efectiva implementación de los reglamentos derivados de la Ley Núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que se encuentran pendientes en consulta pública y que son esenciales para fortalecer el marco regulatorio y garantizar la seguridad vial en la República Dominicana.
20. Promover un sistema de transporte ordenado y organizado que fomente el uso eficiente del espacio vial y contribuya a reducir el manejo imprudente y desaprensivo, lo cual constituye una de las principales causas de accidentes de tránsito.
21. Fortalecer la atención médica profesional, estableciendo registros de traumatismos en los establecimientos de atención de salud para recopilar información sobre la causa de la lesión y las intervenciones clínicas.
22. Apoyo a la expansión de servicios de recuperación y rehabilitación para prevenir la discapacidad permanente.
23. Fortalecer la atención a los lesionados a causa del tránsito, garantizando los servicios quirúrgicos y de cuidados críticos, dotados de personal y equipos necesarios.

24. Explorar las alternativas de financiamiento y movilización de recursos que permitan el desarrollo de las políticas de seguridad vial necesarias para generar los cambios requeridos para la mejora de la seguridad vial.
25. Evaluar las recomendaciones de las Naciones Unidas para la elaboración de planes nacionales de seguridad vial, en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, a partir de los siguientes pilares: gestión de la seguridad vial, infraestructura vial segura, vehículo seguro, usuario seguro y respuesta ante emergencias.
26. Valorar los alcances de los ejes estratégicos adoptados para el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de República Dominicana 2021-2030, a saber: institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información.
27. Participar de forma activa en las mesas técnicas de trabajo y en los talleres, con miras a definir las acciones, plazos e indicadores de avance que darán como resultado el Plan Nacional para la Seguridad Vial 2025-2030.

5. TRANSPARENCIA

Todas y todos concordamos que las acciones a implementar en el marco del presente *Pacto Nacional por la Seguridad Vial en la República Dominicana* serán realizadas en estricto apego al principio de transparencia que rige la actuación del Estado, debiendo publicitar las acciones que se deriven de la ejecución del presente.

CONSIDERACIONES FINALES

La construcción de la visión del país a la que aspiramos todas y todos los compromisarios de este Pacto y la superación de desafíos en la materia de Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, demandan implementar acciones acordes a los nuevos tiempos.

Todas y todos concordamos que las acciones a implementar en la materia de Tránsito y Seguridad Vial es una tarea compleja que requiere capacidad, esfuerzo sostenido a largo plazo y responsabilidad compartida. Por lo tanto, se espera compromiso, entusiasmo y creatividad para lograr el cumplimiento de las metas planteadas.

Declaramos que trabajaremos unidos y de forma permanente para hacer realidad la visión que ha sido plasmada en este documento.

A todo esto, nos comprometemos, los que firmamos, en este día dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

Luis Rodolfo Abinader Corona
Presidnete de la República

Milton Morrison Ramírez
Por la Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)